

personas jurídicas públicas son bienes eclesiásticos, y que los bienes de las personas jurídicas privadas sólo quedan afectados por los cánones en la medida en la que expresamente se señale (cfr. c. 1257). Esta conocida opción de la actual ordenación canónica, que no sin dificultades fue aceptada durante la tarea codificadora, sigue teniendo sus detractores. En nuestra opinión la ruta que se inició, al distinguirse entre personas jurídicas públicas y privadas, no tendría ningún sentido si no hubiera estado unida a una amplia y general libertad de las personas privadas en materias patrimoniales. Esta ruta es tan novedosa y el cambio es de tal calibre, que no pueden sorprender las reticencias. Pienso que el paso del tiempo podrá confirmar el interés de esa opción para la libre y responsable actuación de los fieles, que está ya facilitando la multiplicación de sus iniciativas y, sobre todo, que libera a la autoridad, a la Jerarquía, de responsabilidades económicas en ámbitos que no son, ni tienen por qué ser, de su directo interés y responsabilidad; y esto porque existen ámbitos que no están ligados a la naturaleza propia de las responsabilidades pastorales propiamente jerárquicas, sino que caen sólo sobre su general deber de vigilancia.

Todavía son pocos los tratados que han aparecido después del Código de 1983. La ruta que rápidamente, nada más publicarse el Código, inició Aznar Gil y su preocupación por mejorar su esfuerzo en una segunda edición, señala un camino en el que estamos seguros se irán uniendo trabajos de otros autores, tanto en esta materia, el Derecho patrimonial canónico, como en muchas otras materias.

JOSÉ A. FUENTES

**A. BOYER**, *Le droit des religions en France*, Paris, Presses Universitaires de France, col. «Politique d'aujourd'hui» 1993, 260 pp.

El autor, que ha estado encargado de la misión de los asuntos religiosos en la Dirección general de la Administración, en el Ministerio del Interior, se propone precisar la situación actual de las relaciones entre Iglesias y Estado, y discernir los puntos de evolución previsibles y la recuperación de situaciones anteriores.

De la primera parte de esta obra, sobre las perspectivas históricas de las relaciones entre las Iglesias y el Estado, nos limitaremos sobre todo a comentar el tercer capítulo, «La laicidad a la francesa: adquisiciones y perspectivas». La laicidad, condición de la tolerancia, es ante todo neutralidad, ausencia de intervención del Estado en el dominio de la fe y de las convicciones personales. Nacida en un país de fuerte tradición católica, se ha desarrollado paralelamente a la secularización de la sociedad francesa, por tanto a partir de la ruptura que constituye la Revolución francesa. La laicidad llega a ser agresiva al comienzo del siglo XX, cuando se votan las leyes de separación entre la Iglesia y Estado. La laicidad, valor que transmite la escuela pública, se convierte en un principio constitucional, proclamado desde el primer artículo de la Constitución de 1946, recogido de nuevo en la Constitución de 1958.

Sin embargo, con la apertura de fronteras en Europa, parece que es necesaria una nueva definición de la laicidad, que le conferiría un carácter más positivo. En el espacio europeo, la separación radical de las Iglesias y el Esta-

do, explica el autor, puede ser un modelo para una sociedad pluralista: permite evitar cualquier distinción —discriminación— entre cultos reconocidos y cultos no reconocidos; debe facilitar la coexistencia entre grupos religiosos diferentes, siendo la religión un asunto individual y privado, contentándose el Estado en ejercer la tutela de las asociaciones y el orden de las manifestaciones públicas de la fe, del ejercicio del culto, procurando, en primer lugar, garantizar la libertad religiosa. Se esperan algunas evoluciones claramente en lo referente al lugar de la religión en la enseñanza, o en el caso de los servicios de capellanía en los ejércitos, en los hospitales o en las prisiones.

La segunda parte del trabajo presenta «el derecho de las religiones, derecho de las asociaciones». Este título se explica en base al hecho de que, en Francia, las religiones están organizadas jurídicamente en el cuadro de las asociaciones. Una primera cuestión concierne a las asociaciones y a los cultos. Es necesario acudir a la jurisprudencia del Consejo de Estado para conocer los criterios que permiten considerar una asociación como cultural: la antigüedad del movimiento religioso, su carácter internacional, el fin no lucrativo y no «de curandero», el respeto de la libertad individual y de los principios de la sociedad, la actividad estrictamente cultural. Ciertas disposiciones de orden fiscal podrían hacer pensar que las asociaciones culturales cumplen una misión de interés público. Nótese que el principio de la unicidad de asociación cultural por diócesis no debe ser puesto en duda, como se ha recordado en 1991, cuando el obispo de Ars-Belley ha querido erigir como asociación cultural el Seminario que acababa de abrir.

Interesante, y muy particular, es la situación concedida a las congregaciones. Si las congregaciones religiosas surgen claramente del derecho asociativo, pueden beneficiarse con ventajas por el hecho mismo de que provienen de un culto reconocido. Los estatutos de las congregaciones deben contener «la sumisión de la congregación y de sus miembros a la jurisdicción del ordinario». Pues, en Derecho canónico, las congregaciones quedan fuera de la jurisdicción de los obispos. Dicho de otro modo, observa el autor, la autoridad así reconocida al ordinario por la ley de 1905, aboca a un reconocimiento *de facto* de la Iglesia católica que esta misma ley acababa de quitarle *de iure*. El reconocimiento legal de las congregaciones ha sido posible a partir del momento en que el régimen de Vichy abolió el delito de congregación. Faltaba todavía una decisión política en este sentido. Esta fue tomada por el presidente Pompidou. El primer reconocimiento legal, desde 1901, se llevó a cabo así, en 1970. Desde entonces, más de ciento ochenta congregaciones han sido reconocidas, entre las cuales dos congregaciones budistas, tres ortodoxas y una protestante (El Ejército de Salvación). Falta lo que desearían muchos canonistas: que, en el ámbito europeo, algunas congregaciones simplemente constituidas puedan ser reconocidas, y que el reconocimiento legal no sea ya la única vía para conferirles la personalidad moral. El autor estudia también la cuestión de las grandes asociaciones de origen confesional que tienen una misión de interés público.

En cuanto a los ministros de culto, es necesario constatar con el autor que, en el plano jurídico, no son ciudadanos igualmente que los demás. En efecto, el

derecho les somete a obligaciones y a incapacidades específicas en razón misma de sus funciones. Esto es particularmente llamativo en cuanto a las incapacidades profesionales, sobre todo la prohibición hecha a los clérigos de enseñar en las escuelas públicas de primaria y bachiller. Exclusión que figura entre los aspectos de la laicidad que podrían ser puestos en duda en el cuadro de las reglamentaciones europeas. Cuando el juez es conducido a resolver litigios que sobrevienen en el interior de una asociación cultual a propósito de la protección social de los ministros del culto, hace aplicación del Derecho interno del culto al que esa asociación se refiere, de ahí una jurisprudencia abundante sobre el estatuto jurídico de los ministros del culto. Pero el hecho de que, a pesar de la especificidad de sus funciones, ellos gocen, gracias al legislador, de una amplia protección social, hace indirectamente al Estado-Providencia protector de los cultos existentes.

Pasando al régimen de los lugares de culto, el autor aporta una precisión estadística interesante. Existen, en Francia, más de 38.000 iglesias católicas, 1.200 templos protestantes, 1.100 mezquitas y salas de oración musulmanas, cerca de 500 sinagogas y oratorios israelitas, más de un centenar de pagodas budistas, sin contar las salas de reunión de otros grupos religiosos. La diferencia de tratamiento que el legislador hace entre los edificios de culto anteriores a 1905 (fecha de la separación de la Iglesia y el Estado) —que llegan a ser propiedad del Estado, de los departamentos y de las comunas, a la vez que «dejados gratuitamente a la disposición de los establecimientos públicos de cul-

to, luego a las asociaciones llamadas a reemplazarlos»—, y edificios posteriores a esa fecha, conduce a crear una desigualdad de hecho entre los cultos y a restablecer ventajas en favor de los antiguos cultos reconocidos. Por otra parte, si la legislación no había previsto nada para favorecer la construcción de edificios de culto, en realidad la jurisprudencia ha admitido modalidades indirectas de ayuda a esta construcción, haciendo una interpretación liberal de la ley de 1905. Esta misma jurisprudencia del Consejo de Estado contribuye a atenuar las desigualdades de hecho, en detrimento de los cultos nuevamente aparecidos en el curso de la historia (el Islam no tenía ninguna mezquita en 1905). Es lo que se ha llamado la «laicidad de compensación».

El autor aborda igualmente la cuestión de la tutela y del orden de los cultos. La tutela de las asociaciones cultuales ha podido interpretarse como un control administrativo. De hecho, aparece cada vez más como una garantía y una protección, por numerosas disposiciones jurídicas y por la ventajas fiscales consentidas, siempre que la asociación en cuestión no altere el orden público y la vida social. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha mostrado la posibilidad de evolución y de adaptación de la legislación sobre las congregaciones, que ha pasado de ser una ley agresiva a convertirse en una ley liberal, y que, refiriéndose únicamente a las congregaciones católicas, puede desde ahora aplicarse a congregaciones de otras obediencias religiosas.

Una última parte considera los problemas del ejercicio de los cultos y la presencia de cultos nuevos. Ahí se tratan cuestiones de orden público, el sa-

crificio ritual y las fiestas, así como los modos de organización jurídica de las principales religiones en Francia y los problemas específicos planteados por el Islam. Sobre este último punto, corresponde a los musulmanes definir su estructura, pues, en un régimen de laicidad, esta estructura no podrá jamás ser impuesta por el Estado. Ella deberá nacer a partir de la red asociativa existente, pero sin descansar sobre una jerarquía religiosa, que el Islam ignora.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

**Johann HIRNSPERGER**, *Statuten der österreichischen Domkapitel*, Franz KALDE (editor), *Colección Subsidia ad ius canonicum vigens applicandum*, n.º 3, Abtei-Verlag, Metten 1992, 128 pp.

En el prólogo explica el autor que su propósito ha sido facilitar a la canónica el acceso a las fuentes y promover la transparencia del orden jurídico de la Iglesia (p. 6). A estas dos razones, que me parecen loables, se podría añadir otra, quizá aún de mayor importancia: puesto que en el ordenamiento canónico la ley es expresión de los mandatos de Dios y de la Iglesia, por una parte; y por otra, la ignorancia de las leyes tiene peculiares efectos jurídicos (c. 15, § 1), resulta evidente que todo cuanto contribuya al mejor conocimiento del Derecho, se convierte en un medio para la realización de la justicia entre los miembros del Pueblo de Dios.

La posibilidad ofrecida por el c. 502, § 3 de que las Conferencias Episcopales encomienden las funciones del colegio de consultores al cabildo catedralicio, ha sido ejercitada por la Conferencia Epis-

copal de Austria (cfr. «Amtsblatt der Österreichischen Bischofskonferenz», n.º 1, de 25 de enero de 1984 y n.º 3 de 15 de abril de 1989). De ahí el interés en conocer sus estatutos.

Con excepción de las diócesis de Innsbruck y Feldkich, todas las diócesis austríacas tienen cabildo catedralicio. El autor recopila en esta obra sus estatutos. Aparecen también recogidos en la edición los estatutos del cabildo de Brescia (perteneciente a la Conferencia Episcopal italiana), por los estrechos lazos espirituales que unen a esta diócesis con las diócesis austríacas y de las colegiadas de Mattsee y Seekirchen.

El primer capítulo (pp. 8-36) contiene los estatutos de los cabildos catedralicios con sede en la provincia eclesiástica de Salzburgo: Salzburgo, Klagenfurt y Graz. Los cabildos de Viena, Linz, San Pölten y Eisenstadt se integran en la provincia eclesiástica de Viena y constituyen el segundo capítulo de este opúsculo (pp. 38-73). En apéndice posterior (pp. 76-96) se reproducen los estatutos del cabildo de Brescia y de las colegiadas de Mattsee y Seekirchen. Los índices finales por voces y cánones están muy cuidados. Además, hay un elenco bibliográfico de los estudios doctrinales realizados sobre las fuentes objeto de esta recopilación, que es sin duda útil para los estudiosos de los órganos colegiales de gobierno en la Iglesia.

Esta forma de presentación de las fuentes y documentos resulta positiva. Su valor radica en que la sistemática y el criterio de edición es convincente. Ofrece al lector los fundamentos para formarse por sí mismo un juicio.

MARÍA J. ROCA